

**REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO QUINTO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS
LABORALES DE MEDELLÍN**

Medellín, abril doce (12) de dos mil veintitrés (2023)

Dentro del presente proceso ejecutivo laboral de única instancia, promovido por PROTECCION S.A en contra de INVERSIONES GARCYZEZ, el apoderado de la parte ejecutante presentó recurso de reposición el día 07 de junio de 2022, a través del correo electrónico institucional del Despacho, contra el auto que negó el mandamiento de pago, proferido el día 3 de junio de 2022, publicado en estados el día 6 de junio de 2022, arguyendo que la UGPP es la entidad encargada de vigilar que los Fondos de Pensiones adelanten un proceso de cobro idóneo en contra de los empleadores que incumplen su obligación de pago de las pensiones obligatorias de sus empleados. Que, para el desarrollo de esta función de Vigilancia la UGPP reglamentó el procedimiento de cobro mediante la Resolución 2082 de 2016, la cual subrogó la Resolución No. 444 del 28 de junio de 2013 con el fin de establecer el objeto y alcance de los estándares de cobro, así como implementar prácticas que propendan a mejorar la gestión de cobro y optimicen el recaudo de la cartera en mora, respetando lo establecido en la Ley 100 sobre la constitución de título ejecutivo complejo que da origen al proceso de cobro ejecutivo laboral. Que, la entidad procedió a emitir la liquidación la cual presta mérito ejecutivo conforme al artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

Afirma, además que, si bien la liquidación que sirve como base del título ejecutivo complejo fue elaborada el 19 de mayo de 2022, lo cierto es que en sujeción de lo reglamentado por la UGPP y en virtud de la renuencia de pago por parte del empleador deudor, encontrándonos dentro de los cuatro meses establecidos para la presentación de la presente demanda ejecutiva laboral descrita en el asunto. De igual forma, ante la protección especial que gozan los trabajadores en Colombia, los derechos laborales de los afiliados no se pueden desconocer por un procedimiento netamente administrativo. Que, como consecuencia de las acciones de contacto y depuración adelantadas al demandado, se identificó un riesgo real de no pago además de característica en el empleador que determinan estar ante una cartera de difícil recuperación; ante el RIESGO DE INCOBRABILIDAD se omitieron las acciones persuasivas contempladas en la Resolución 2082 de 2016, decisión fundamentada en lo establecido en la misma RESOLUCION 2082 DE 2016 Anexo Técnico Capítulo 3 Estándares de Acciones de Cobro en su numeral 3 donde autoriza el INICIO DE ACCIONES PREJURIDICAS OMITIENDO LAS ACCIONES PERSUASIVAS TENIENDO EN CUENTA LAS

CARACTERISTICAS DEL APORTANTE SIN VOLUNTAD DE PAGO, permitiendo a los Fondos acudir directamente a la acción ejecutiva cuando se determine la existencia de un riesgo real en la recuperación de la cartera, lo que genera un riesgo inminente para el afiliado próximo a pensionarse

En el caso de marras, conforme a la Resolución N° 2082 de 2016, conviene traer a colación que, para que las Administradoras de Fondos de Pensiones puedan reclamar mediante acción ejecutiva judicial el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores frente a los aportes al Sistema General de Seguridad Social, deben haber adelantado un aviso de incumplimiento encaminado a incentivar el pago voluntario de las contribuciones parafiscales adeudadas, el cual consiste en que una vez se realice la liquidación de los aportes en mora y los correspondiente intereses moratorios, en un plazo que no podrá ser superior a quince (15) días, deberá remitir un primer requerimiento al empleador moroso, informándole el estado de mora y la liquidación realizada, sino hay respuesta, o la misma no acredita el pago o liquidación parcial, deberá remitirse un segundo requerimiento con la liquidación de los aportes en mora e intereses moratorios, en un términos entre los treinta (30) días siguientes al primer contacto, sin superar los cuarenta y cinco (45) días, a lo que tampoco da cumplimiento la entidad.

Es así como debe tenerse en cuenta que la constitución de los títulos ejecutivos por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones es una excepción a la regla general sobre que el título ejecutivo sea un documento proveniente del deudor, en la medida que la ley, excepcionalmente faculta a las AFP a elaborar una liquidación que prestaría mérito ejecutivo; empero, debe garantizarse que en la constitución del mismo no se incurra en arbitrariedades o abuso del derecho, cumpliéndose con los procedimientos y reglas establecidas para la elaboración del título de ejecución, porque, de lo contrario, se afectaría la validez o aplicabilidad del mismo.

Es así como los artículos 12 y 13 de la Resolución 2082 de 2016, expedida por la UGPP en ejercicio de las atribuciones legales que le fueron asignadas en el párrafo 1 del artículo 178 de la ley 1607 de 2012, señalan:

“ARTÍCULO 12. ACCIONES PERSUASIVAS. Una vez las Administradoras constituyan el título que presta mérito ejecutivo, deben contactar al deudor como mínimo dos veces. El primer contacto lo deben realizar dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la constitución y firmeza del título ejecutivo, según el caso, y el segundo, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que se realizó el primer contacto, sin superar cuarenta y cinco (45) días calendario, de conformidad con los criterios que se definen en el Anexo Técnico Capítulo 3 “

“ARTÍCULO 13. ACCIONES JURÍDICAS. Vencido el plazo anterior las administradoras contarán con un plazo máximo de cinco (5) meses para dar inicio a las acciones de cobro coactivo o judicial, según el caso”.

05001410500520220032900

Niega Recurso

De lo anterior puede afirmarse que las acciones persuasivas que se realizan con posterioridad a la elaboración del título, no son elementos constitutivos del mismo, en tanto, se itera, estas deben ser realizadas con posterioridad a su constitución.

Empero, cuando se trata de la exigibilidad de los mismos, ello sí depende de la realización de las acciones persuasivas de que habla la normatividad transcrita, pues la misma es clara en señalar el deber de contactar al deudor mínimo dos veces después de contar con el título ejecutivo, y solo vencido el plazo que se le otorga al moroso para pagar en estas acciones persuasivas, comienza a contar el plazo máximo de cinco (5) meses para dar inicio a las acciones de cobro judicial.

Corolario con lo expuesto, considera esta Agencia Judicial que se está de cara a la carencia de uno de los requisitos formales del título complejo, lo que conlleva a concluir que el título ejecutivo presentado por la parte ejecutante no contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible.

Como consecuencia de lo anterior, no se repone la decisión.

NOTIFÍQUESE

LUIS DANIEL LARA VALENCIA
Juez

Firmado Por:
Luis Daniel Lara Valencia
Juez Municipal
Juzgado Pequeñas Causas
Laborales 05
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3d6c440bd3a3617c47f0b426a1c25d2b2a6ae318d48180faf4e5efc8f771100b**

Documento generado en 13/04/2023 10:40:40 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>